

Jorge Castro

La contraofensiva de Kirchner

Jorge Castro

Presidente del Instituto de Planeamiento Estratégico

La contraofensiva política impulsada por Néstor Kirchner después de su derrota electoral del 28 de junio profundiza, con total coherencia, el método de confrontación sistemática como mecanismo de acumulación de poder político y económico que caracterizó inalterablemente su estrategia desde el 25 de mayo de 2003.

Esta contraofensiva tiene una significación semejante a la que el propio Kirchner impulsó en el segundo semestre de 2008, con la aprobación de la estatización de las AFJP y de Aerolíneas Argentinas, cuando empleó ese mismo recurso para frenar la hemorragia que experimentaba su poder político luego del “voto no positivo” del vicepresidente Julio Cobos en la sesión del Senado del 17 de julio, que selló la derrota del gobierno en el conflicto con el sector agropecuario.

Lo cierto es que esa anterior contraofensiva de 2008 no pudo impedir la derrota en las elecciones del 28 de junio de 2009, a pesar del súbito adelantamiento del cronograma electoral, de la presentación de Kirchner como primer candidato a diputado nacional y de las “candidaturas testimoniales” de Daniel Scioli y de la mayoría de los intendentes peronistas del conurbano.

Si el conflicto agropecuario marcó la “derrota estratégica” de Kirchner, el 28 de junio llevó esa derrota estratégica al terreno estrictamente político, en el sentido de la pérdida de su poder hegemónico, entendido en principio no como una incapacidad para gobernar sino como imposibilidad para imponer su propia sucesión.

El sistema de poder vigente se caracteriza por su debilidad institucional, un rasgo histórico estructural de la Argentina acentuado por la crisis de diciembre de 2001, signada por la inexistencia de partidos políticos concebidos como actores unificados a escala nacional, y la consiguiente preeminencia de los poderes territoriales. Esto hace que el poder político se concentre en el eje de las decisiones, que hoy reside en Kirchner, sin mediaciones institucionales ni partidarias. Adquiere un carácter hegemónico y no institucional.

Cuando se produce la súbita irrupción de un hecho nuevo, como ocurrió primero con el conflicto agropecuario y luego con los resultados electorales del 28 de junio, se cuestiona al resorte central de ese sistema de poder hegemónico. Esa crisis se desenvuelve en una sociedad intensamente movilizada, en la que todos los actores políticos y sociales tienden a resolver sus conflictos por el camino de la acción directamente en calles, rutas y plazas..

Esa tendencia no es un defecto “cultural” o genético de la sociedad argentina, sino el resultado de una particular historia de construcción nacional. La Argentina es el país de más alto grado de participación y politización de América Latina y la contrapartida es un bajo nivel de institucionalidad. Perón decía que la Argentina es un país “muy politizado pero con escasa cultura política”.

La actual situación es aún mucho peor para el oficialismo que la de 2008. La percepción generalizada fuera del gobierno, tanto en la Argentina como en el exterior, es que Kirchner ya no está en condiciones de digitar la sucesión presidencial. El próximo gobierno, cualquiera sea su signo, le será políticamente hostil. En ese sentido, su suerte está echada. Pero esa percepción de ninguna manera le resta “capacidad

de daño". Más aún, lo obliga a radicalizar sus métodos de acción. Más allá de cualquier juicio de viabilidad, la consigna "Kirchner 2011" refleja esa necesidad de supervivencia.

En este escenario, el dato novedoso es que Kirchner, siempre fiel a sí mismo, redobló otra vez la apuesta, aún a costa de seguir perdiendo consenso social. Porque esa contraofensiva avanzó decididamente en el terreno parlamentario, utilizando la mayoría que conservará hasta el 10 de diciembre en ambas cámaras del Congreso para lograr la sanción de la prórroga de los superpoderes, la ley de presupuesto para el 2010 y la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Fuera del escenario legislativo, esa contraofensiva política se manifestó también en diversas medidas de gobierno, como el decreto de establecimiento de la asignación universal por hijo. Pero sobre todo ésta se reflejó en algunas publicidades acciones callejeras, como el hostigamiento al titular de la Unión Cívica Radical, Gerardo Morales, en Jujuy o el bloqueo organizado por el sindicato camionero a la distribución de diarios en la ciudad de Buenos Aires, y en las medidas administrativas orientadas a avanzar sobre la empresa Papel Prensa.

Simultáneamente, crece el rechazo a Kirchner en la opinión pública. Su imagen positiva es hoy aún más baja que la que tenía el 28 de junio, cuando él personalmente perdió las elecciones en la provincia de Buenos Aires y el oficialismo fue derrotado en la ciudad de Buenos Aires y en las provincias de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Catamarca, Corrientes, San Luis y hasta en Santa Cruz, entre otras.

La oposición política, centrada en la problemática

institucional, contempla con cierto asombro ese avance del kirchnerismo. Dicho avance, que parecería ignorar el mensaje de las urnas, revela que en realidad Kirchner ha hecho su propia y lúcida lectura de los resultados electorales. Esa lectura indica que, al menos en las actuales condiciones, al gobierno le resulta virtualmente imposible recuperar el consenso perdido. Por lo tanto, la única opción es el repliegue sobre las "fuerzas propias", tratando de evitar mayores deserciones dentro del peronismo, y el ataque contra las fuerzas adversarias, con el objetivo de inmovilizarlas a través del empleo de diversas tácticas de debilitamiento.

Para Kirchner, lo que está en juego es nada más y nada menos que la supervivencia misma del gobierno y hasta su propia libertad personal. En el fondo, sus prevenciones se fundan en la apreciación del ex Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, quien lo expresó con una crudeza lindante con la crueldad, al señalar que para Kirchner la opción es "reelección o Devoto".

En este contexto, el kirchnerismo tiende a valorar el resultado de sus políticas en función de la idea de "poder de fuego", concebido básicamente como capacidad de control de las movilizaciones callejeras, más que en el intento de buscar la recuperación del respaldo de la opinión pública. La prioridad absoluta es el desarrollo de acciones desestabilizadoras o potencialmente "destituyentes".

Esta selección de prioridades explica el hecho de que la dirigente jujeña Milagro Sala, proyectada a la luz pública nacional no en razón de su dilatada militancia social en la provincia norteaño sino pre-